

Medellín, cuatro (4) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Proceso	OTRAS ACCIONES CONSTITUCIONALES - POPULAR
Radicado	05001 31 03 002 2017 00685 02
Demandante	BERNARDO ABEL HOYOS MARTÍNEZ
Demandada	MARROCAR S.A.S.
Juzgado origen	SEGUNDO CIVIL CIRCUITO MEDELLÍN

Decide la Sala la apelación interpuesta frente al auto del 11 de mayo de 2023, mediante el cual se aprobó la liquidación de costas dentro del proceso de la referencia.

1. ANTECEDENTES.

Mediante auto del 11 de mayo de 2023 la juez de primer grado aprobó la liquidación de costas realizada por la secretaría del despacho, en la cual se incluyó como monto las agencias en derecho liquidadas en primera instancia por \$1.160.000.

2. EL RECURSO.

El actor popular se opuso a lo resuelto mediante recurso de reposición y en subsidio de apelación, indicando que el auto no se encuentra motivado ni respeta el principio determinado por la ley, por lo que solicitó modificar la tarifa.

Por su parte, la sociedad demandada presentó similares recursos bajo el argumento de considerar exagerada la suma fijada como agencias en derecho, teniendo en cuenta la nula actuación procesal del demandante, la cual se limitó a radicar la solicitud de amparo, porque en adelante las actuaciones se surtieron por la labor del despacho y fue la Alcaldía de Medellín quien realizó las gestiones de verificación en el sitio.

Mediante auto del 17 de julio de 2023 el juzgado mantuvo su decisión, al considerar que, en atención a la mínima labor del actor popular dentro del proceso, lo procedente era fijar el monto mínimo establecido en el Acuerdo PSAA-16-10554 por lo que así procedió. Seguidamente concedió la alzada en el efecto diferido, ordenando la remisión del expediente digital a esta corporación para lo pertinente.

3. CONSIDERACIONES.

3.1 COMPETENCIA.

Por disposición del artículo 321 del CGP, el recurso de apelación contra autos procede solamente respecto de aquellos que la misma norma relaciona o que precisan disposiciones especiales, encontrándose el presente asunto previsto en el numeral 5 del artículo 366 del mismo estatuto.

Para resolver, dispone el artículo 328 de la misma obra que, salvo decisiones que se deban adoptar de oficio, el superior debe limitar su análisis a las razones de inconformidad expuestas por el recurrente.

3.2 PROBLEMA JURÍDICO.

Le corresponde a la Sala determinar si en el presente asunto, el monto de las agencias en derecho fijadas en primera instancia se encuentra ajustado a derecho y, a partir de ello, determinar si hay lugar a revocar o confirmar la providencia que aprobó la liquidación de costas.

3.3 FUNDAMENTOS JURÍDICOS.

Costas procesales y fijación de agencias en derecho (normatividad y jurisprudencia).

Ha sido posición reiterada de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia que las costas procesales:

“Se encuentran instituidas en favor de quien sale vencedor en el litigio, con el fin de compensar los gastos en que éste incurrió para hacer valer sus reclamos, lo que amerita que se incorporen las agencias en derecho, como una partida representativa del pago de honorarios al profesional que se contrató para ejercer vocería, en virtud del derecho de postulación”¹

Para la tasación de las agencias en derecho, que integran los rubros que se incluyen en las costas, el numeral 4 del artículo 366 del CGP, dispone que:

“4. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de dichas tarifas.”

¹ CSJ, auto AC del 2 de diciembre de 2013, rad 2007-00019-01, reiterado en auto AC5073-2015 y AC3906-2018.

En similar sentido, el artículo 2 del acuerdo PSAA16-10554 de 5 de agosto de 2016 del Consejo Superior de la Judicatura, establece los criterios a tener en cuenta para la fijación de las agencias en derecho, así:

*"Artículo 2o. Criterios. Para la fijación de agencias en derecho el funcionario judicial tendrá en cuenta, **dentro del rango de las tarifas mínimas y máximas establecidas por este acuerdo**, la naturaleza, la calidad y la duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y demás circunstancias especiales directamente relacionadas con dicha actividad, que permitan valorar la labor jurídica desarrollada, **sin que en ningún caso se puedan desconocer los referidos límites.**" (Se destaca)*

Por otro lado, tratándose de procesos declarativos en general, el numeral 1 del artículo 5 del mencionado acuerdo, establece como tarifa en primera instancia para los asuntos que carecen de cuantía:

"b. Por la naturaleza del asunto. En aquellos asuntos que carezcan de cuantía o de pretensiones pecuniarias, entre 1 y 10 S.M.M.L.V."

3.4 CASO EN CONCRETO.

En el *sub lite*, tal como se precisó, el marco tarifario previsto en el Acuerdo PSAA16-10554 de 5 de agosto de 2016 del Consejo Superior de la Judicatura, establece la potestad al *a quo* de fijar las agencias en derecho entre 1 y 10 SMLMV, para lo que se tuvo en cuenta que el actor popular presentó la solicitud de protección de los derechos colectivos y no realizó actuación alguna más allá de acudir a la audiencia de pacto de cumplimiento, y la apelación de la sentencia en la que no se condenó en costas a su favor².

Ahora bien, en lo atinente a la justificación del monto de las agencias en derecho fijadas, se advierte que el presente se trata de una acción popular en la que el demandante presentó solicitud de inicio el 27 de noviembre de 2017 donde enunció el cumplimiento de requisitos y solicitó admitir y tramitar la misma dando el impulso oficioso establecido por la ley 472³; que pese a los diversos requerimientos al demandante para que realizara la notificación de la demandada, fue el despacho quien en auto del 13 de septiembre de 2021 dispuso realizar ella por secretaría⁴; que en ninguno de los memoriales allegados por el actor popular se dio cumplimiento a las

² Ver ruta Carpeta 01PrimeraInstancia / Archivo 65.2017.00685ResuelveReposicionesPaginas

³ Ibid. Archivo 01.2017.00685DemandaAnexoFolios1a2

⁴ Ibid. Archivo 17.2017.00685IncorporaSolicitudSentenciaOrdenaNotificacionFolios99a100

cargas procesales, y lo único que se pretendió en ellos fue la labor oficiosa del despacho.

Tales circunstancias permiten concluir que la labor del actor popular en el trámite fue mínima, pues pese a que se trata de una acción popular, su deber de colaboración se limitó a la presentación de la solicitud, lo que implicó la prolongada duración del proceso.

En tal panorama, el despacho considera acertada la decisión de la *a quo*, en tanto que, en cumplimiento de lo ordenado en sentencia de segunda instancia, fijó como agencias en derecho a favor del actor popular la suma equivalente a un (1) salario mínimo, que fue lo posteriormente liquidado y aprobado; teniendo en cuenta para ello, el límite establecido en el Acuerdo que rige la materia.

Dado lo anterior, no se comparten los argumentos de la sociedad apelante, en la medida que se calificó en debida forma la actuación del demandante, y en estricta aplicación de la norma, se fijó el monto mínimo como agencias en derecho, por lo que ningún reproche merece la decisión proferida por la juez de instancia en este aspecto. Similares argumentos sirven para desvirtuar la apelación del demandante, quien simplemente adujo una falta de motivación y apego a la normatividad, lo que con lo expuesto queda desvirtuado.

De este modo, se advierte la necesidad de confirmar el auto censurado. Sin condena en costas.

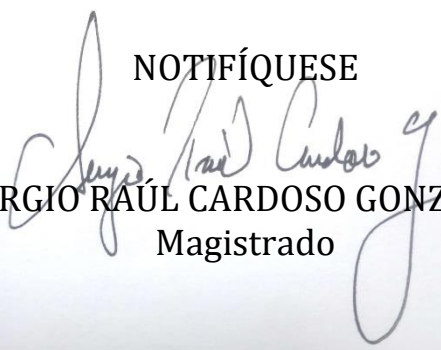
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, Sala Unitaria de Decisión Civil,

4. RESUELVE.

PRIMERO: CONFIRMAR la decisión impugnada, sin condena en costas.

SEGUNDO: REMITIR el expediente al juzgado de origen.

NOTIFÍQUESE



SERGIO RAÚL CARDOSO GONZÁLEZ
Magistrado